

SE RECRUDECE LA BATALLA DEL TLC CENTROAMERICANO

Demócratas y sindicatos se oponen, preocupados por el impacto en industrias vulnerables y la pérdida de empleos en EU, así como por la falta de suficiente protección ambiental y laboral en la región

ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT
/THE ECONOMIST

A un año de haber firmado su iniciativa comercial clave, el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica (TLCCA), el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, descubre que tal iniciativa resulta ser una venta más difícil de lo que esperaba. Congresistas demócratas, sindicatos y poderosos sectores de negocios han endurecido su oposición a dicho acuerdo. De no obtener la aprobación de estos sectores, Bush saldría muy mal parado y además retrasaría el resto de su agenda comercial. Por eso usa toda su influencia para convencer a los escépticos de votar en su favor. Que esa estrategia vaya a funcionar es un asunto que se vuelve cada vez más difícil de predecir.

En estos momentos, aun los más importantes funcionarios de la administración admiten que no cuentan con el número requerido de votos en el Congreso para garantizar la aprobación del TLCCA, el cual incluye a Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, así como a la República Dominicana (por ello en ocasiones las siglas en inglés son CAFTA-RD). El tratado de Centroamérica es, con mucho, el más controvertido de los seis pactos de libre comercio que Bush ha firmado desde que asumió la presidencia en 2001. Por esta razón todavía no puede presentar el tratado, el cual firmó el 28 de mayo de 2004, de manera formal al Congreso para su ratificación. Enfrentará obstáculos tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, pese a que en ambas existe mayoría republicana.

Los demócratas y los sindicatos se oponen totalmente, preocupados por el impacto en las industrias vulnerables y la pérdida de empleos en Estados Unidos, así como por la falta de suficiente protección ambiental y laboral en Centroamérica. En particular, señalan que los gobiernos centroamericanos son demasiado laxos para aplicar sus leyes laborales, y por lo tanto no reúnen las condiciones para un TLC con EU.

Las compañías textiles y la industria azucarera también han cabildeado duro en contra. La postura de la industria textil se encuentra dividida, pues entidades como el Consejo Nacional



Protesta contra el TLC entre Costa Rica y Estados Unidos frente a la casa del Premio Nobel de la Paz 1987, Oscar Arias Sánchez, durante una manifestación organizada por diversos sectores sociales en febrero de este año en San José

del Algodón, el cual representa a la industria algodonera desde el agricultor hasta el fabricante de textiles, recientemente dieron su aprobación al acuerdo (las exportaciones de algodón estadounidense representan 90% del producto crudo que se usa en Centroamérica). El Consejo Nacional de Organizaciones Textiles también lo apoya. Aun así, muchos productores de telas y ropa cuyas fábricas se encuentran en suelo estadounidense, así como los legisladores que representan a los estados donde esta industria es fuerte (por ejemplo las Carolinas y Georgia), rechazaron el acuerdo.

Por su parte, la industria azucarera permanece unida contra el TLCCA. Es una de las industrias más férreamente controladas de EU y lleva ya mucho tiempo derivando beneficios del proteccionismo bajo la forma de cuotas y precios mínimos, los cuales mantienen los precios domésticos del azúcar artificial-

mente altos. Aunque el TLCCA permitiría sólo un incremento modesto en las importaciones de azúcar a corto plazo, los productores estadounidenses argumentan que el tratado es una gran amenaza para la industria. Aun los republicanos de los estados productores más grandes, como Luisiana y Florida, que por lo general respetan la línea del partido, parecen prestar mucha atención a sus argumentos.

El debate sobre el TLCCA también ha quedado atrapado en una naciente ola de sentimientos proteccionistas derivada del creciente déficit comercial de EU, en particular contra China, cuyas exportaciones de ropa a EU empezaron el primero de enero, cuando expiró el sistema de cuotas textiles globales. El efecto China complica más el de por sí difícil caso del TLCCA, a pesar de que este tratado permitiría a los productores de ropa centroamericanos, así como a

las compañías estadounidenses que son sus proveedoras, sobrevivir a la competencia china.

Se necesita toque personal

El presidente Bush apuesta a que las habilidades negociadoras de su nuevo representante comercial, Robert Portman, un ex congresista, ayudarán a convencer a los legisladores. Tras prestar juramento, el 29 de abril, Portman de inmediato saltó a la sartén del TLCCA. Pero Bush necesitará usar todo su encanto personal, y hasta deberá torcerles el brazo a algunos si es necesario, para lograr la aprobación del tratado.

Recientemente Bush viajó a 10 ciudades estadounidenses con objeto de solicitar apoyo para el TLCCA, y el 12 de mayo se reunió con los seis jefes de Estado de los países firmantes. Como grupo cabildearon al Congreso, pero hasta ahora ningún nuevo respaldo se ha anunciado. Para Bush la pelea apenas comienza.

El gobierno no puede darse el lujo de que el TLCCA fracase. Sería la primera vez que un acuerdo comercial fuera firmado por un presidente y no aprobado por las cámaras, y haría trizas toda la agenda comercial de Bush. También imposibilitaría avanzar en acuerdos bilaterales que por estos días se negocian con varios países andinos—asuntos como derechos laborales, azúcar y textiles son también la manzana de la discordia en esas negociaciones— y daría un golpe mortal al tratado más ambicioso: el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), conformada por 34 países, que de cualquier forma se encuentra estancada.

Más aún, la muerte del

Bush necesitará usar todo su encanto personal, y hasta deberá torcerles el brazo a algunos si es necesario, para lograr la aprobación del tratado

TLCCA complicaría aún más las perspectivas para la difícil ronda de Doha de pláticas comerciales patrocinadas por la Organización Mundial de Comercio. Un borrador del acuerdo debe estar listo para una reunión clave en Hong Kong, en diciembre. En tiempos recientes se han hecho algunos avances en cuestiones técnicas, incluso el acuerdo sobre un sistema para calcular tarifas más bajas. Pero disputas mayores sobre subsidios agrícolas en Europa y EU, y cómo abrir el mercado de servicios en los países en desarrollo, todavía son puntos que deben resolverse. Las negociaciones de la Organización Mundial de Comercio simplemente se vinieron abajo el pasado septiembre, durante la última reunión ministerial en Cancún, México, en buena medida debido a desacuerdos sobre subsidios agrícolas. Los países en desarrollo demandan que tales subsidios se reduzcan antes de abrir más sus mercados al consumidor, a los productos industrializados y a los servicios.

En el pasado, Bush ha demostrado que puede salirse con la suya en asuntos comerciales. En 2001 tuvo éxito en asegurar la aprobación de la "autoridad para la promoción comercial" (TPA, por sus siglas en inglés), la cual permite negociar pactos comerciales que el Congreso puede aprobar o rechazar, pero no modificar. El predecesor de Bush, Bill Clinton, en su tiempo fracasó en renovar dicha disposición especial, entonces conocida como "autoridad fast-track", antes de que expirara. Pero Bush ganó la aprobación de la TPA por un solo voto en la Cámara de Representantes... margen que podría escapársele cuando llegue el turno del TLCCA.

FUENTE: EIU/INFO-E



Vista parcial de una marcha realizada el 7 de abril frente a la embajada estadounidense en Ciudad de Guatemala, en contra del Tratado de Libre Comercio firmado entre los países centroamericanos y EU

Es probable que el Congreso apruebe la iniciativa que fija rigurosas medidas para que indocumentados puedan obtener licencias de manejo; también "extirpará" falsas solicitudes de asilo

ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT
/THE ECONOMIST

Una nueva medida que hará más estrictas las normas para la obtención de licencias de manejo es sólo el comienzo de una batalla en torno a las leyes federales estadounidenses sobre migración.

Ante la expectativa de que el Congreso apruebe una ley que fija rigurosos lineamientos para que los inmigrantes indocumentados puedan obtener licencias de manejo, activistas y legisladores se preparan a dar una fuerte batalla para revisar la política migratoria del país.

Una nueva medida que se aprobará este mes intenta enfrentar los asuntos fronterizos incrementando el patrullaje y usando mejor tecnología, en lugar de limitarse a dificultar a los inmigrantes la obtención de documentos de identificación. A la vez, se espera que ofrezca a los trabajadores inmigrantes mayores oportunidades para obtener estatus legal.

En tanto, activistas por los derechos de los inmigrantes y algunos funcionarios estatales censuran que la Cámara de Representantes haya aprobado, el 12 de mayo, un decreto de egresos por 82 mil mdd que incluye la Ley de Identidad Real (Real ID), y que el Senado haya hecho lo mismo un día después. El presidente Bush ha confirmado la resolución, que se adjuntó a una ley que aprueba gastos militares de emergencia.

"Es una pesadilla y un mandato improcedente para los estados", dijo Jeanne Butterfield, directora ejecutiva de la Asociación de Defensores de Inmigrantes de Estados Unidos. "No ayuda en nada a impedir la entrada de terroristas verdaderos. Todo es una desviación, una peligrosa desviación".

Quienes apoyan la ley aseguran que se trata de una herramienta esencial para la seguridad de las fronteras y para impedir la entrada de terroristas.

"Esta ley aspira a impedir otro ataque tipo 11 de septiembre, al obstruir los viajes de terroristas y reforzar la seguridad de nuestras fronteras", sostuvo el representante de Wisconsin, James Sensenbrenner, uno de los principales promotores de la medida y presidente del Comité Judicial. Afirmó que también se "extirparán" falsas

ACTIVISTAS PREPARAN LA DEFENSA CONTRA UNA NUEVA LEY ANTINMIGRANTE EN EU

Defensores de derechos de migrantes dicen que la disposición condenará a los indocumentados a actuar con mayor clandestinidad

solicitudes de asilo "presentadas por personas que mienten".

Las normas, concertadas en negociaciones a puerta cerrada, dan un plazo de tres años a los estados para decretar leyes que implanten los cambios relativos a las licencias de conducir, los cuales exigen probar que una persona está en EU de manera legal, por ejemplo, con un acta de matrimonio o una tarjeta de seguridad social. Como no especifican cuál identificación será requerida, dejan muchas de esas

licencias ni cómo se sufragará su costo. También se dijo desilusionado de que dicha norma haya disuelto el grupo de especialistas, creado durante la vigencia de la ley de inteligencia del año pasado, que desarrollaba normas federales.

"Queremos seguridad. No vamos a quejarnos del costo de la seguridad", dice Balboni. "Pero tendríamos que haber resuelto esos detalles".

La Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales estima

res, pero Balboni considera que, dependiendo de las nuevas normas, Nueva York podría hacer algunos cambios.

Antes del 11 de septiembre, muchos estados consideraban otorgar licencias a inmigrantes indocumentados, principalmente por la preocupación de que no podían contratar seguros para sus vehículos, dice Melissa Savage, analista de transporte de la Conferencia. Sin embargo, después del 11 de septiembre hubo un viraje.

El representante demócrata Joseph Crowley sostiene que es una norma "de plano perversa" y que vuelve casi imposible que las víctimas de abuso y tortura obtengan asilo

Más allá de las licencias, la medida otorga a los jueces migratorios mayores facultades para decidir sobre la credibilidad de los solicitantes de asilo. También otorga a los funcionarios de Seguridad Interna más poder para prescindir de requisitos legales y para continuar con una barda en la zona fronteriza de San Diego.

Los activistas dicen que la medida condenará a los inmigrantes indocumentados a actuar con mayor clandestinidad. "Un planteamiento puramente impositivo está condenado a fracasar", advierte Angela Kelly, subdirectora del Foro Nacional de Inmigración. "Es como una macana a punto de caer sobre la cabeza de la gente. Claro que debe haber mano dura, pero también estímulos."

Los activistas cifran sus esperanzas en una extensa modificación a la nueva norma, impulsada por los senadores John McCain, de Arizona, y Edward Kennedy, de Massachusetts, la cual se espera que otorgue a los trabajadores inmigrantes más oportunidades para legalizar su situación y más facilidades para que las familias se reúnan.

"Debemos atender el asunto de manera integral y no por partes, como hace la Ley de Identidad Real", señaló Laura Capps, vocera de los Kennedy.

Los legisladores se habían mostrado reacios a promover reformas mayores a la política migratoria. Eso cambió después del 11 de septiembre. Con todo, los defensores de los derechos de los inmigrantes y algunos legisladores republicanos y demócratas se quejan de que la Ley de Identidad Real se aprobó sin convocar a audiencias o sin mucho debate.

"Muchas oportunidades se perdieron. No creo que sea el final de la historia", dijo Balboni. "Podría haber una verdadera reacción."

FUENTE: EIU/INFO-E



NOTIMEX

Miembros de La Casa del Migrante en Tijuana pintan leyendas en la malla ciclónica que divide la frontera con Estados Unidos

decisiones al Departamento de Seguridad Interior, el cual, sin embargo, carece de una oficina para dar seguimiento a la elaboración de leyes.

Dicha ley también permite a los estados establecer un doble sistema que les permita otorgar certificados a los inmigrantes en vez de licencias, pero éstos no pueden ser usados como identificación federal ni para abordar aviones. También permite a los estados dar licencias temporales a visitantes extranjeros. Si un estado no accede, ninguna de sus licencias será reconocida como identificación federal.

El senador republicano Michael Balboni, que representó a los estados en las negociaciones, se quejó de que la Ley de Identidad Real no especifica características de seguridad de

que su ejecución costará 500 mdd. En tanto, personal de la judicatura dice que la Oficina del Presupuesto de Congreso determinó un costo de 100 mdd durante cinco años y afirma que el esfuerzo será financiado con subvenciones federales. Según dicha oficina la medida refleja una tendencia que ya existe en los estados.

Según la Conferencia, actualmente 12 estados no requieren prueba de ciudadanía o de estatus legal para obtener licencia de manejo. De éstos, Tennessee y Utah adoptaron en forma reciente leyes que permiten a los inmigrantes indocumentados obtener un certificado.

Otros 24 estados, entre ellos Nueva York, exigen prueba de ciudadanía. Muchos de esos no tendrán que hacer ajustes mayo-

Los que apoyan la ley de Identidad Real dicen que es necesaria para asegurar una identificación auténtica. "Creemos que da más seguridad a nuestra comunidad y nuestros estados", afirma Amanda Bowman, presidenta de la Coalición para una Licencia de Manejo Segura, grupo neoyorquino que cabildea para endurecer las normas sobre licencias de conducir como forma de combatir el terrorismo. "Todas estas medidas atenúan los riesgos. Este es un documento clave. Funciona como un pasaporte interno."

En cambio, el representante demócrata Joseph Crowley sostiene que es una norma "de plano perversa" y que vuelve casi imposible que las víctimas de abuso y tortura obtengan asilo.

AEROLÍNEAS Y TELEVISORAS DE MÉXICO, ¿IMPOSIBLE COMPETENCIA?

► A 20 años de lanzar el programa de privatización, el gobierno trata de revertir sus desastrosos efectos

En algunos casos, sobre todo en la manufactura sujeta a competencia, la privatización resultó un éxito. Pero otras liquidaciones dejaron problemas duraderos

ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT
/THE ECONOMIST

A casi 20 años del lanzamiento de un intensivo programa de privatización, México trata de revertir sus desastrosos efectos. El gobierno planea una nueva liquidación de las dos más grandes aerolíneas del país, las cuales volvieron a manos del Estado tras la bancarrota que sufrieron a mediados de la década de 1990, poco después de su privatización.

Mientras tanto, un grupo de senadores de diferentes partidos ha lanzado una campaña para modificar las reglas aplicables a la televisión a fin de permitir la creación de una tercera cadena televisiva, y así superar al duopolio que surgió en 1993, tras la privatización de la cadena estatal Imevisión.

“La mayor parte de las reformas que empezaron a mediados de los ochentas fueron aprobadas siempre y cuando no alteraran el orden político de México”, afirma Luis Rubio, jefe del organismo mexicano independiente Centro de Investigación para el Desarrollo (Cidac). Esto significa que se rompieron algunas reglas a favor de los buenos contactos de negocios, mientras el gobierno retuvo el control sobre las más importantes industrias estratégicas.

En algunos casos, sobre todo en la manufactura sujeta a competencia, la privatización resultó un éxito. Pero otras liquidaciones dejaron problemas duraderos.

El sistema bancario se fue a la bancarrota y fue vendido a extranjeros tras un rescate de 65 mil millones de dólares. Las radiodifusoras y las aerolíneas están controladas por duopolios, mientras el país se agobia bajo el peso de los servicios de telecomunicación más caros del mundo.

El reto de reprivatizar las aerolíneas ilustra las dificultades de enmendar errores a la hora de la venta. Mexicana y Aeroméxico dominan las principales rutas internas de México, con excepción de vuelos hacia algunos lugares turísticos de playa, donde juegan su parte algunas aerolíneas



REUTERS

Aeronaves de Mexicana y Aeroméxico estacionadas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

as pequeñas, pertenecientes a los estados, entre ellas AeroCaribe y Aerolitoral.

Cintra, la compañía controladora gubernamental que maneja las cuatro aerolíneas, abandonó el plan de vender Mexicana y Aeroméxico fusionadas en una sola unidad.

La Comisión Federal de Competencia lo había aceptado de manera provisional, siempre y cuando a la empresa resultante de la fusión de Aerolitoral y AeroCaribe —también en vías de privatización— se le dieran suficientes rutas y recursos para competir.

La razón que se adujo para el cambio de opinión fue que a dicha empresa le llevaría años prepararse para la competencia contra un rival más grande.

El dilema de Telmex

El incidente tiene paralelo con el dilema que México enfrentó hace más de una década, cuando privatizó Teléfonos de México (Telmex), el monopolio de telecomunicaciones.

A Roller Noll, economista de la Universidad de Stanford que asesoró a México en la venta de Telmex en 1990, le desecharon la propuesta de privatizar por separado los servicios de telefonía local y de larga distancia, después de instituir una entidad reguladora independiente.

La alternativa elegida por el gobierno generó mucho más dinero para la hacienda pública, pero su efecto a largo plazo fue crear una extraordinaria gallina de los huevos de oro para los

inversionistas que adquirieron la empresa. Carlos Slim, quien encabezó el grupo de inversionistas que compró Telmex, es ahora el cuarto entre los hombres más ricos del mundo.

El dilema, dice Noll, es entre decidir si el principal objetivo de la privatización es “generar mucho dinero para el gobierno” o mejorar el desempeño de la industria.

“La forma de generar la mayor cantidad de dinero es privatizar el monopolio con un mínimo de regulaciones. Si el objetivo es mejorar el desempeño, primero se establece una entidad reguladora, luego los competidores, y después se privatiza la competencia”.

Aparte de un sistema regulatorio descrito por Noll como “inviabile desde el inicio”, México enfrentó el consejo contradictorio del Banco Mundial que recomendó vender Telmex como un monopolio.

“En el momento en que la privatización se efectuó en México, en el Banco Mundial dijeron que era una industria muy frágil y que no habría incentivos para la inversión. Fue un completo error”, explica Noll.

Precios que responden a razones políticas

Otro embrollo es la privatización de Tv Azteca, la segunda televisora del país, creada mediante la venta de estaciones en 1993 con la finalidad de constituir una competencia para Televisa, el monopolio anterior.

Después de la privatización resultó que Ricardo Salinas Pliego, quien compró la compañía, había obtenido un préstamo de 30 mdd de Raúl Salinas de Gortari, hermano del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. La adquisición contribuyó a convertirlo en uno de los hombres de negocios más poderosos de Latinoamérica.

“En los casos en los que no hubo competencia extranjera, como en los bancos y la televisión, los precios se abrieron a la negociación y hubo poca transparencia. En consecuencia, los precios fueron muy altos y se fijaron por razones políticas”, dice Rubio, de Cidac.

Los senadores que presionan para la reforma del sector argumentan que Tv Azteca y Televisa funcionan como un duopolio, y los dos consorcios han batallado duro contra una ley que pretenda crear una tercera emisora.

Una cobertura negativa de ambos consorcios televisivos es una terrible amenaza para cualquier político, lo cual no pasaría si hubiera más competencia. Pero, como muestra la experiencia contundente de la privatización mexicana, una vez que una industria ha sido privatizada sin competencia, ésta es casi imposible de implantar más tarde.

FUENTE: EIU/INFO-E



FRANCISCO OLIVERA

Antena de transmisión de Televisa Chapultepec. Senadores de diferentes partidos han lanzado una campaña para modificar las reglas aplicables a la televisión a fin de permitir la creación de una tercera cadena televisiva